



Íconos. Revista de Ciencias Sociales
ISSN: 1390-1249
revistaiconos@flacso.org.ec
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
Ecuador

Martí i Puig, Salvador; Bastidas, Cristina
¿Ha cambiado la protesta? La coyuntura actual de movilizaciones en Bolivia y Ecuador
Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 44, septiembre, 2012, pp. 19-33
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50923939002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

¿Ha cambiado la protesta? La coyuntura actual de movilizaciones en Bolivia y Ecuador

Have Protests Changed? Current Political Mobilization in Bolivia and Ecuador

Salvador Martí i Puig

Doctor en Ciencias Políticas. Profesor-investigador de la Universidad de Salamanca y miembro del CIDOB-Barcelona, España.

Correo electrónico: smarti@usal.es

Cristina Bastidas

Magíster en Ciencias Políticas. Docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador.

Correo electrónico: cristina.bastidas@iaen.edu.ec

Fecha de recepción: abril 2012
Fechas de aceptación: agosto 2012

Resumen

Bolivia y Ecuador atraviesan un proceso de cambios en el sistema político y una reconfiguración de las fuerzas sociales y políticas. Frente a un nuevo escenario, las organizaciones, movimientos sociales y colectivos han cambiado sus formas de acción y relacionamiento con los actuales gobiernos. La nueva estructura de oportunidades políticas fruto de la llegada al poder del Movimiento al Socialismo y de Alianza País produjo el desplazamiento de algunas redes y activistas de los movimientos sociales hacia la administración y otros hacia la protesta. Con ello, durante los últimos años se evidencia una menor capacidad de movilización aunque también un repunte de las protestas. El presente artículo busca interpretar el fenómeno descrito.

Palabras clave: organización social, protesta, conflictividad, estructuras de oportunidad política, Alianza País, Movimiento al Socialismo, Ecuador, Bolivia.

Abstract

Bolivia and Ecuador are undergoing important changes as their social and political forces shift. In the face of a new scenario, organizations, social movements, and collectives in both countries have reinvented strategies and relationships with their current governments. The political opportunities structure that arose when *Movimiento al Socialismo* and *Alianza País* came into power brought certain networks and activists into administration, and drove others into protest. Consequently, there has been a decrease in the movements' capacity for mobilization over the last few years, but also an increase in the number of protests. This article interprets the above phenomenon.

Keywords: social movements, protest, conflict, political opportunity structures, Alianza País, Movimiento al Socialismo, Ecuador, Bolivia.

Planteamiento del tema

Tanto para Bolivia como para Ecuador los últimos cinco años han significado un recambio de las fuerzas políticas y sociales que marcaron la escena política del decenio anterior. En efecto, a partir de 2006 en Bolivia y de 2007 en Ecuador, los gobiernos de Movimiento al Socialismo (MAS) y Alianza País (AP) respectivamente, llegaron al poder con un amplio apoyo popular y con una fuerte voluntad de dar un giro a la política y a las políticas públicas hasta ese momento implementadas en esos países desde su retorno a la democracia. Este escenario de cambio es el espacio donde ahora confluyen nuevos tipos de participación, organización y conflictividad política, y con ello la aparición de nuevos campos de lucha e interacción entre la sociedad y el Estado.

Sin duda, el cambio político y el recambio de élites en la política de estos dos países han significado también un cambio en las fuerzas sociales que animaron las luchas pasadas. Hasta antes de la instalación de estos dos gobiernos, movimientos sociales indígenas, organizaciones de género, asociaciones y organizaciones no gubernamentales generaron una serie de alianzas estratégicas y repertorios comunes, presionaron por un cambio en el sistema político, una superación de las políticas neoliberales y el nacimiento de un nuevo escenario político con mayor sensibilidad hacia las demandas ciudadanas¹.

Durante los años noventa y en el primer lustro del siglo XXI, la eclosión de movilizaciones políticas y protestas populares—donde los pueblos indígenas tuvieron un especial protagonismo— fue un episodio común en toda América Latina. Además, durante esos años, destacó la capacidad que tuvieron las organizaciones populares de sumar aliados y de enfrentarse a gobiernos que aplicaban de forma expeditiva las reformas neoliberales del Consenso de Washington (Martí i Puig, 2009). En esta dinámica, para Pérez-Liñán (2009), los casos de Ecuador y Bolivia destacaron por la intensidad de las protestas y, a la postre, por la capacidad de llevar a cabo una particular forma de *accountability* social destituyendo jefes de Estado. A raíz de ello es posible afirmar que la aparición, victoria y consolidación del MAS y de AP son incomprensibles sin tener en cuenta la larga ola de movilizaciones acontecidas durante más de un decenio.

Con la llegada del MAS y de AP, los gobiernos de Bolivia y Ecuador gozaron de un período de relativa “paz social” y ausencia de protestas populares, la conflictividad en este contexto se redujo a ciertas protestas impulsadas por determinadas élites territoriales o de sectores desplazados del poder². Sin embargo, durante los últimos

1 Hay una notable bibliografía sobre los procesos de movilización y protesta que antecedieron a la llegada de Morales y Correa al poder. Entre ellos destaca el trabajo editado por Domingo (2006) para el caso boliviano y la obra de Sánchez (2008) para el caso de Ecuador.

2 Nos referimos a las protestas que se presentaron en la región oriental boliviana denominada “Media Luna” y a las movilizaciones del Municipio de Guayaquil en Ecuador. Sobre las movilizaciones de la “Media Luna” véase el excelente análisis de Assies (2006), para una comparación entre las movilizaciones regionalistas y autonomistas en Guayaquil y el Oriente boliviano véase el sólido trabajo de Burbano (2012).

años (2010-2011), las administraciones de Correa y de Morales han experimentado un repunte de protestas de diversos sectores populares, cobrando una especial significación la activación de un sector del movimiento indígena que en su momento fue aliado de Morales, y en menor medida, de Correa.

Esta última ola de movilizaciones impulsadas por sectores populares mantiene algunos elementos de continuidad con las anteriores, pero en ellas es posible observar también cambios sustantivos. El objetivo de este trabajo es interpretar cuáles fueron las razones por las cuáles se desactivó la protesta durante los primeros años de los gobiernos de Correa y Morales, y señalar los motivos y la naturaleza del nuevo repunte de conflictividad popular.

El largo proceso de creación y activación de movimientos populares

El decenio que antecedió a la llegada de Morales y Correa al poder se caracterizó por la emergencia y explosión de movilizaciones sociales, así como de nuevos liderazgos sociales en Bolivia y Ecuador. Los movimientos indígenas y campesinos marcaron gran parte del talante organizativo de estos dos países en la década de los noventa del siglo pasado e inicios de la primera década de este siglo. A las luchas indígenas y campesinas se unieron otro tipo de luchas sociales: ecologistas, ambientalistas, de género, entre otras (Assies, 2004; Gutiérrez, 2008; García Linera, Chávez León y Costas Monje, 2005). En dicho contexto, el escenario de confrontación y lucha con el estado neoliberal y sus políticas abrió un canal de confluencia para que varios tipos de demandas encuentren un cauce común.

La revuelta popular de 1952 alteró el orden social en Bolivia y produjo organizaciones locales, intermedias y nacionales sólidas de sindicatos campesinos ligados a la problemática minera (Aranzáes, 1992). Un ejemplo de ello fue la Central Obrera Boliviana que acompañó al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) en sus dos primeros años de gobierno. El sindicalismo campesino fue una de las más fuertes formas de movilización y organización en Bolivia y predominó frente a otras formas de organización hasta la década de los ochenta (Dunkerley, 1984). En adelante, el sindicalismo, desde la perspectiva de algunos autores, declinó en su accionar por tres factores: la migración campo ciudad (Degregori, 1999), la frustración de no alcanzar las conquistas sindicales demandadas y la pérdida del monopolio en la representación del campesino indígena. Esta decadencia del sindicalismo “llevó al surgimiento de nuevas organizaciones y movimientos indígenas, algunos negando explícitamente el sindicalismo y las identificaciones de clase, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), otros articulando el sindicalismo con las formas ‘originarias’ de organización social y política, como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ)” (Guimarães, 2011: 333).

A raíz de la nueva dinámica organizativa, el movimiento de protesta boliviano destacó por su capacidad de aglutinarse, siendo el conflicto vinculado a la producción de coca el fenómeno más relevante³. A partir de entonces los productores de coca fueron criminalizados, tanto por la legislación (Ley 1008) como por las autoridades estatales que intentaban erradicar los cultivos de coca.

En este contexto resurgieron dos grandes organizaciones de segundo grado, campesinas y sindicales: la Confederación Nacional Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTB) y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). Una de las reivindicaciones principales de dichas organizaciones fue la defensa del cultivo de coca y lo hicieron a través de un discurso culturalista que entendía la coca como “la hoja sagrada representativa de la cultura andina y amazónica, no solamente en el seno del sindicalismo campesino, sino también en el movimiento indígena del Oriente boliviano, ajeno a la cultura de coca” (Do Alto, 2007: 74). Fue así como se ligaron formas de organización sindical con organizaciones de tipo comunitario indígena (Van Cott, 2005). Además de los conflictos relacionados con el cultivo de coca en el Chapare también fue fundamental “la guerra del agua” que aconteció en Cochabamba. Según Hendel (2011) estos dos fenómenos son cruciales para la llegada de Evo Morales Ayma al poder.

De forma similar, aunque con menor intensidad en la participación, en el Ecuador, el decenio anterior a la instalación del actual Gobierno significó un proceso de consolidación de nuevos actores sociales que demandaban una activa participación en la estructura política del país. El fenómeno de la participación organizativa registrado en Ecuador en la década de los noventa del siglo XX e inicios de la primera década de este siglo estuvo ligado a la organización en sectores urbanos y su vinculación con comunidades campesinas e indígenas en el campo⁴.

Por alrededor de medio siglo, las comunidades indígenas habían logrado configurar una serie de organizaciones políticas propias que, pese a no tener gran incidencia en el sistema político formal, mantenían una tradición organizativa acompañada por la Iglesia, algunas organizaciones no gubernamentales y otros movimientos sociales de carácter nacional e internacional (Sánchez, 2004; 2007). Al mismo tiempo, para la década de los noventa aparecían nuevos sujetos y actores colectivos: movimientos de mujeres, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, cuya fuerza, de acuerdo a Brysk (2007), estuvo dada por su capacidad para establecer alianzas en coyunturas específicas.

3 El crecimiento de campesinos dedicados al cultivo de coca en la zona del Chapare, ubicada en el trópico de Cochabamba, fue el resultado de olas migratorias de campesinos indígenas que tuvieron que dejar el Altiplano de Bolivia debido a la fuerte sequía de 1985 y al cierre y despido de más de 20 000 mineros por las reformas que imperaban en la época (Monasterios, 2007).

4 No es posible entender la acción colectiva de la década de los noventa del siglo pasado en Ecuador sin hacer alusión a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Barrera (2001) señala que la emergencia de la CONAIE estuvo ligada al impacto de la crisis del modelo desarrollista en el país y la apertura hacia un modelo de economía abierta que generó impactos negativos sobre las economías campesinas. En este sentido se puede afirmar que la movilización indígena y campesina fue una reacción al modelo neoliberal imperante en la época.

De acuerdo a Van Cott (2005) y Martí i Puig (2008), el caso ecuatoriano destacó por la importancia de la organización unitaria y la existencia de una densa red de organizaciones para compensar la ausencia de recursos materiales. En efecto, a partir de la última década del siglo XX la participación organizativa en Ecuador estuvo caracterizada por su capacidad de actuar en red y de coordinar ciertas acciones. Ello explica, por ejemplo, la creación de la Coordinadora de Movimientos Sociales y Organizaciones Sociales en 1995 que agregó a organizaciones sindicales, asociaciones de trabajadores, organizaciones mutuales, campesinas e indígenas del país; explica también la creación de una serie de confederaciones y organizaciones de tercer grado como la CONAIE, cuyo fin fue construir desde las bases organizativas hacia ámbitos nacionales y configurar redes.

La protesta disruptiva y la toma de la capital –Quito– fueron el repertorio de acción colectiva principal de la CONAIE y lo que mayores logros generó en el Ecuador de los noventa. Después del mandato de Durán Ballén y de la crisis política con la que terminó su gobierno, el movimiento indígena en alianza con organizaciones urbanas, barriales y de género tuvo una gran capacidad de incidir en la vida política del país.

El movimiento indígena, a mediados de la década de los noventa, se planteaba ingresar en la esfera política formal a través del partido político Pachakutik que se presentó a elecciones por primera vez en 1996 en alianza con el Partido Socialista y la Izquierda Democrática y logró alcanzar 75 puestos de representación popular. Otro hecho que demostraba su entrada en la democracia formal fue su activa participación en la Asamblea Constituyente de 1998 donde el movimiento logró el reconocimiento de las nacionalidades indígenas y una serie de derechos colectivos, así como la definición del Ecuador como Estado multicultural y pluriétnico. Sin embargo, el movimiento indígena, a pesar de su incursión en la vida política institucional, nunca abandonó la protesta en la calle. Es más, el ciclo de mayor intensidad en cuanto a movilizaciones impulsadas por el movimiento indígena se dio a finales de los noventa y durante los primeros años de la década posterior⁵.

Fruto de los procesos de organización y movilización descritos en ambos países (que se intensificaron durante la década de los noventa, pero que tenían un origen muy anterior) se desarrolló a finales del siglo XX y a inicios del XXI un intenso proceso de política disruptiva que puso “punto y final” a un ciclo de gobiernos neoliberales que se habían gestado desde los procesos de transición a la democracia. La quiebra de este tipo de gobiernos fue la antesala de la llegada de dos proyectos políticos progresistas de nuevo cuño, de difícil clasificación, pero con un fuerte apoyo de bases movilizadas, con liderazgos fuertes y con la pretensión de recrear un estado nacional-popular fuerte (Panizza, 2009).

5 Entre los episodios de protesta más relevantes destacan las movilizaciones de febrero de 1997 que terminaron con la fuga del poder del entonces presidente Abdalá Bucaram; la del 21 de enero del 2000 cuyo desenlace fue el derrocamiento del gobierno de Jamil Mahuad; y la de enero y febrero del 2001 que obligó al gobierno de Gustavo Noboa a desistir del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Los gobiernos de Morales y Correa y el descenso de la protesta

El proceso de transformación que han vivido Bolivia y Ecuador a partir de la instalación de los gobiernos de Morales y Correa, respectivamente, ha sido, en gran medida, fruto de la prolongada ola de luchas sociales que les antecedieron. Diversas organizaciones conjuntamente con el movimiento indígena presionaron en protestas y manifestaciones por cambios radicales en la estructura del Estado. Al igual que otros países de la región, Bolivia y Ecuador, vivieron en la última década del siglo XX, y durante el primer lustro del siglo presente, una profunda crisis del sistema político que se manifestó en la incapacidad del Estado para generar condiciones de gobernabilidad y en la progresiva desinstitucionalización (y quiebra) del sistema tradicional de partidos. A raíz de este fenómeno, la llegada de los gobiernos mayoritarios del MAS y de AP supuso un cambio crucial en la forma de ejercer el poder: se dio mayor énfasis a la presencia del Estado en el territorio, se pretendió acotar la discrecionalidad de actores privados nacionales y transnacionales, y se estableció una agenda inspirada en los reclamos populares del decenio anterior.

En este sentido, las nuevas administraciones fueron producto de la presión ejercida por parte de los movimientos sociales que funcionaron durante más de un decenio a través de sólidas redes de apoyo y solidaridad. La presión ejercida por estos movimientos supuso, a la postre, un cambio radical en el sistema político. El resultado fue una intensa participación en la arena política de sectores que anteriormente estaban excluidos y que casi nunca vieron representados sus intereses ni en el sistema de partidos ni en las instituciones, siendo el reclamo central de sus luchas el combate a la pobreza.

Fruto de lo expuesto, no resulta extraño que las administraciones del MAS y de AP tuvieran como prioridad el incremento de la inversión social para disminuir la desigualdad⁶. Para ello, estos gobiernos lucharon por generar una mayor recaudación tributaria, reducir el peso de la deuda en el presupuesto del Estado y renegociar con empresas extractivas los cánones fiscales⁷. A este propósito ayudó el incremento de los precios de las materias primas (sobre todo del gas y del petróleo).

A raíz de estas políticas, según muestran diversas fuentes⁸, ha incrementado entre la ciudadanía un clima de mayor satisfacción, confianza y legitimidad respecto a la

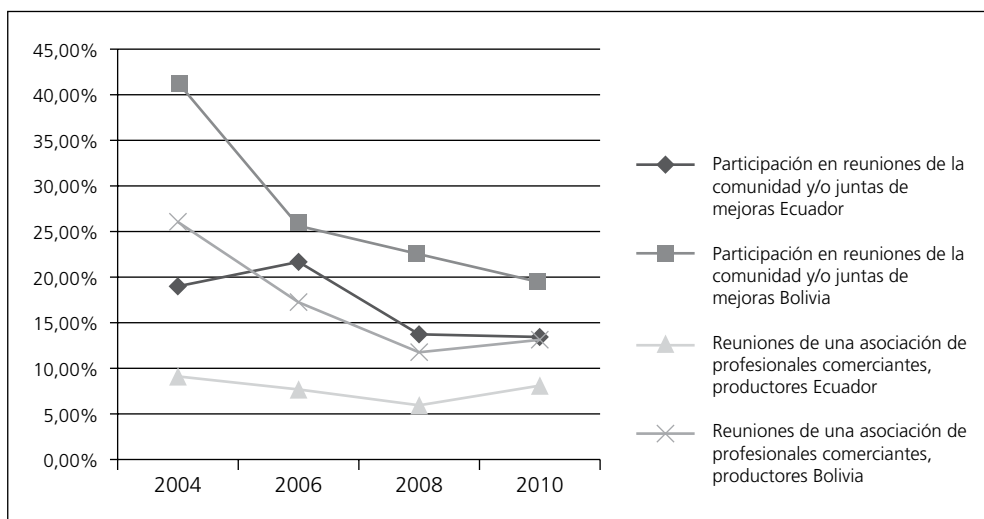
6 En diciembre del 2011, la CEPAL afirmó que Bolivia redujo la pobreza en un 12% desde el 2007. Para el 2011, de acuerdo a la CEPAL, Ecuador es el tercer país con mayor crecimiento económico en América Latina. El país duplicó el promedio regional de crecimiento alcanzando un 8%. También en Ecuador, en el período 2006-2011, la relación del ingreso entre los más ricos y los más pobres cayó en diez puntos.

7 Cabe señalar también que la llegada de estos gobiernos coincidió con un ciclo de crecimiento económico regional. Desde 2003, y a pesar de que las economías centrales experimentaron una crisis económica muy crítica, en América Latina la combinación del aumento del precio de las materias primas, la implementación de políticas anticíclicas (con un notable énfasis en la lucha contra la pobreza), y la existencia de un sistema financiero relativamente saneado generaron un crecimiento notable.

8 Los datos del Latinobarómetro desde 2007 hasta 2011.

democracia⁹. Sin embargo, en el mismo período, si se observan los datos referentes a la participación de los ciudadanos en reuniones comunitarias o en entornos asociativos se constata (tal como se expone en el Gráfico 1) la disminución de este tipo de actividades. El gráfico expresa el porcentaje de personas que participan al menos una vez al mes en las reuniones señaladas. Como se puede apreciar, existe un ligero descenso de la participación entre el 2004 y el 2010, cifra que expresa un tenue aumento hacia el 2010, salvo para el caso de reuniones de la comunidad en Bolivia. Otros espacios de asistencia a reuniones, sea de padres de familia o vinculadas a la Iglesia, expresan la misma tendencia. En general ha existido una tendencia al descenso de la participación.

Gráfico 1: Participación en reuniones comunitarias y reuniones de asociaciones en Bolivia y Ecuador



Fuente: The AmericasBarometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP). Disponible en www.LapopSurveys.org.

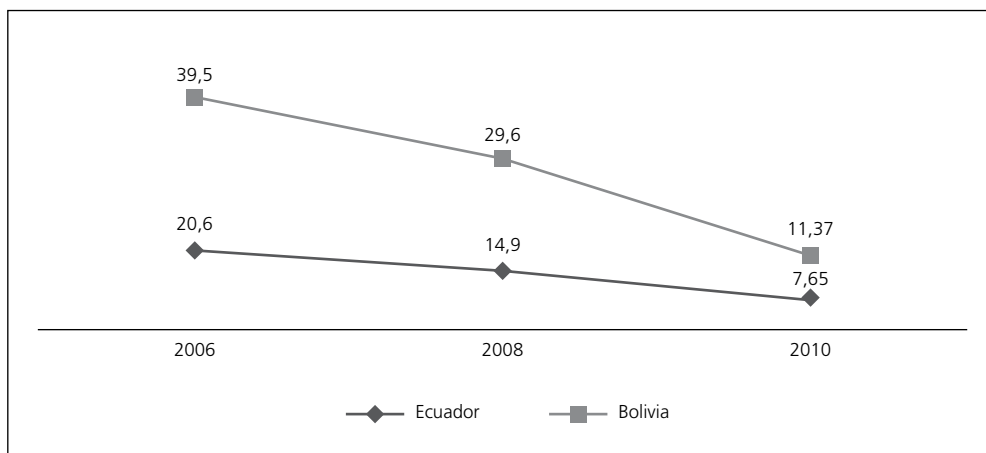
Algo similar ha sucedido con el repertorio de la protesta. Antes de la instalación del nuevo Gobierno en Bolivia, gran parte del espacio de la política boliviana se articulaba a través de la protesta en las calles. De forma similar en los noventa y, en Ecuador, la protesta se convirtió en uno de los principales repertorios tanto del movimiento indígena como de los demás movimientos sociales urbanos organizados. Fueron estas grandes protestas en las calles uno de los elementos que explica las interrupciones presidenciales que vivieron estos dos países (Pérez-Liñán, 2009).

En el último período, sin embargo, parece que este repertorio ha descendido en su intensidad. El Gráfico 2 expresa el descenso en la participación en protestas a partir

9 De acuerdo al último informe del Latinobarómetro (2011), Ecuador ocupa el primer lugar entre todos los países de América Latina, conjuntamente con Uruguay, en confianza en el Gobierno, con un 62%. En Bolivia la cifra es menor, 37%, aunque superior en más de quince puntos con respecto a la evaluación de otros gobiernos en el país antes del 2006.

de la instalación de los nuevos gobiernos en Bolivia y Ecuador. El gráfico muestra el porcentaje de personas que han participado alguna vez al año en protestas públicas entre el 2006 y el 2011. Como se puede apreciar, existe una línea de descenso en los dos países. En Bolivia el descenso significó más de veinte puntos y en Ecuador se registra un descenso de alrededor de catorce puntos.

Gráfico 2: Participación en protestas en Bolivia y Ecuador¹⁰



Fuente: The AmericasBarometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP). Disponible en www.LapopSurveys.org.

¿Por qué ocurre el fenómeno que señalan los dos gráficos anteriores? Una respuesta plausible puede partir de la hipótesis de la disipación del “agravio” de quienes protestaban, debido a que los gobiernos han logrado responder a gran parte de las demandas expresadas durante las luchas sociales pasadas, a saber, la superación de la política neoliberal, la consecución de mayores niveles de igualdad, la implementación de políticas redistributivas y el fortalecimiento del Estado. Pero, sin duda, la respuesta no es tan simple. Para responder a esta pregunta podemos recurrir a las obras de Tarrow (1997) y de McAdam y Scott (2005) que comparten la hipótesis de que muchos actores políticos colectivos nacen gracias a la existencia de una estructura de oportunidades políticas (EOP) favorable, y ésta puede deberse a tres circunstancias: la aparición de nuevos espacios institucionales, la presencia de inesperados aliados externos o el efecto de contagio de fenómenos internacionales que sitúen un tema determinado en el centro de la agenda política y se difunda¹¹.

10 A la pregunta ¿Ha participado en los últimos 12 meses en protestas?, las opciones de respuesta son: algunas veces, casi nunca y nunca. Los resultados presentados representan el porcentaje acumulado de las opciones algunas veces y casi nunca.

11 Según la EOP, la posibilidad de movilizarse está más relacionada con las “oportunidades” que presenta el entorno que con otro tipo de factores sociales, pues los agravios se consideran condiciones necesarias, pero no suficientes, para la emergencia de movilizaciones.

Con seguridad, la instalación de nuevos gobiernos en los dos países ha alterado la capacidad organizativa de la sociedad, sus posibilidades de movilizar recursos y sus formas de relacionarse con el sistema político. En este sentido, es posible señalar que la nueva EOP que supuso la llegada de Morales y Correa generó tres elementos que afectaron inmediatamente la capacidad de movilización. El primero apunta al reclutamiento por parte de los nuevos gobiernos, de una parte importante de sus cuadros, tanto líderes como militantes de las redes sociales que anteriormente se habían movilizado; por tanto, un sector de quienes organizaban la protesta ya no está en la calle sino en la gestión. El segundo elemento es el cambio o desaparición de aliados disponibles para la protesta debido a que los anteriores “promotores o protectores” de las movilizaciones se convirtieron en parte del Gobierno; al mismo tiempo, los nuevos actores disconformes con el Gobierno y dispuestos a protestar –en tanto que defensores del *statu quo* anterior¹²– son poco atractivos para algunos sectores con larga tradición movilizadora (como es, por ejemplo, el movimiento indígena). El tercer y último elemento se refiere a la mayor permisividad por parte del contexto internacional –fruto del impacto del fenómeno de 11-S (Brysk y Shafir, 2007)– frente a las estrategias gubernamentales de contención de la protesta (léase mayor legitimidad para reprimir).

Un nuevo ciclo de la mano de una nueva década: más protestas pero diferentes

Pese a la disminución de la participación organizativa en estos dos países y a la menor participación en protestas hasta el 2010, algunos datos revelan que desde ese año la conflictividad se ha incrementando. Tanto en Bolivia como en Ecuador, después de un período de baja conflictividad, es a partir del mencionado año que se experimenta un importante aumento en el número de conflictos que se registran a través del seguimiento a medios de prensa¹³.

En Bolivia, la conflictividad registrada hasta el 2009 en los medios se mantuvo por debajo de la registrada en las décadas de los ochenta y de los noventa, no así en el 2010, donde la conflictividad ascendió llegando a uno de los picos más altos registrados en la historia de ese país. Según la Fundación Unir, el 2011 registró el número más alto de conflictos en los últimos 42 años en Bolivia sumando un total de 1300. De forma similar en Ecuador, según la revista *Ecuador Debate*, tanto 2010 como 2011 trajeron un fuerte repunte de la conflictividad (en el 2011 hasta el mes de octubre se registraron 286 conflictos), igualando así los picos más altos de los últimos treinta

12 Nos referimos a grupos de élites empresariales u organizaciones que defienden identidades regionales.

13 La Fundación Unir en Bolivia y el Centro Andino de Acción Popular en Ecuador realizan seguimiento a todos los conflictos registrados en medios de prensa día a día. Con ello son capaces de generar una mirada de los cambios en la conflictividad a través del tiempo.

años. Las dos fuentes utilizadas señalan que gran parte de los conflictos están marcados por la oposición a las políticas de cada uno de los gobiernos actuales y por la eclosión de conflictos de orden laboral, siendo los de orden laboral los fundamentales.

Un escenario de menor participación social y de un ligero repunte de la conflictividad parece caracterizar a los dos países desde el año 2010¹⁴. Tanto Bolivia como Ecuador registran tendencias similares en estos dos aspectos. Por ello, cabe preguntarse si la alta conflictividad política que se vive en los dos países puede ser el escenario de un nuevo ciclo de disputa política y de reconfiguración de la organización de las fuerzas sociales luego de un período de relativa calma (Van Stekelenburg, Klandermans y Dijk, 2009).

Lo expuesto en los párrafos anteriores muestra que la instalación de nuevos gobiernos, con el consiguiente cambio institucional y de políticas públicas, generó una mayor satisfacción y valoración de la democracia y también una menor actividad asociativa y participativa. Debido a ello, las redes de algunos movimientos sociales (indígenas, ecologistas o de género) experimentaron un período de debilidad y una menor capacidad de impulsar protestas.

Sin duda, los gobiernos y las organizaciones sociales se influyen mutuamente y, por ello, los nuevos gobiernos y los cambios estructurales en los dos países, reconfiguraron el terreno de juego de las organizaciones¹⁵. De este modo es posible comprender (a través del análisis que se ha expuesto) por qué descendieron las movilizaciones con la llegada de los gobiernos del MAS y de AP; sin embargo, queda aún por responder cuáles son las razones del aumento y la naturaleza de la nueva conflictividad desde el 2010.

La respuesta puede relacionarse con la tensión entre *universalidad* y *particularismo* presente en las agendas políticas de los nuevos gobiernos. Siguiendo esta dirección podría afirmarse que las administraciones del MAS y de AP han tenido como objetivo la recuperación del carácter general y universal de las políticas públicas (financiadas gracias al *boom* de las materias primas y al modelo neo-extractivista), lo que les ha llevado a problemas en el empeño de vincular las agendas universales con agendas más particulares, cuando entre estas últimas, además, se presentan críticas al propio modelo de desarrollo gracias al cual se financian las políticas públicas.

Es necesario recordar que un reto fundamental para estos dos gobiernos fue reconfigurar el Estado en su capacidad de responder al interés general. Es posible, por tanto, que el proceso de redefinición del Estado en su dimensión general universalista haya provocado nuevas tensiones y malestar en organizaciones y colectivos con demandas de tipo más particular. Así por ejemplo, puede haber ocurrido que el énfasis

14 Esto pese a las dudas que puede producir la medición de conflictos en ambos países, donde la pugna entre los medios y el Gobierno podría provocar una sobredimensión de este fenómeno.

15 Para un análisis profundo sobre la interconexión entre los movimientos sociales y los cambios en las organizaciones políticas véase el texto de Diani y Bison (2004).

en las políticas de redistribución y justicia económica (de carácter más universalista) haya entrado en conflicto con otras demandas vinculadas al reconocimiento identitario, a la diferencia de género o a la protección de determinados ecosistemas. Fraser (2006) señala que las demandas de justicia social de las sociedades contemporáneas se pueden clasificar en dos grandes ejes, aquellas que apelan a la justicia redistributiva y las demandas de reconocimiento político de la diferencia. Para Fraser, una de las problemáticas que enfrentan las democracias es la disociación de un tipo de demandas respecto de las otras y ello ha provocado tensiones entre actores que luchan por una mayor democratización y justicia. Ésta, sin duda, puede ser una explicación de la “nueva conflictividad” en Ecuador y Bolivia.

En la coyuntura actual, la proliferación de demandas de corte indigenista en Bolivia ha chocado con la necesidad de construir un Estado nacional, causando notables dificultades y conflictos al Gobierno¹⁶. Para Rolland (2008), el gobierno del MAS se encuentra frente al desafío de establecer un equilibrio entre nacionalismo e indigenismo, generando un problema de gobernanza que le obliga a fortalecer el Estado unitario, a responder a ciertas necesidades particulares de reconocimiento y a la compleja construcción de un Estado plurinacional. En Ecuador también ha existido un déficit en el tratamiento de las demandas de reconocimiento y de diversidad¹⁷. El débil impulso que se ha dado a los Consejos de la Igualdad, la poca importancia dada a la construcción del Estado plurinacional y el énfasis puesto en la ampliación de los derechos sociales y políticos universales (aquellos que tienen que ver con el acceso igualitario de todos los ciudadanos a la esfera económica, social y política) son sólo algunos ejemplos de esta tendencia.

No es una tarea fácil para estos dos gobiernos lograr un equilibrio entre universalismo y demandas de reconocimiento específicas en la coyuntura actual. La historia reciente de estos dos países dejó una impronta en contra del particularismo. Mientras que las corporaciones privadas tenían beneficios exclusivos, se generaba pobreza y el Estado operaba a través de políticas focalizadas hacia los más pobres. Ello dejó fuera del acceso a derechos universales a grandes masas de la población que justamente

16 La movilización de sectores indígenas en Bolivia ha sido llamativa por el hecho de que en el inicio de la administración de Morales éste consiguió aglutinar la mayoría de este tipo de organizaciones a su favor. Por ello, cuando durante el mes de agosto de 2011, centenares de indígenas de las etnias moxeño, chimá y yuracaré iniciaron una larga marcha para exigir que el Gobierno parara la construcción de una carretera vinculada a un “megaproyecto” (que se inscribe en la Iniciativa de Desarrollo e Integración de Infraestructura Suramericana IIRSA) cuyo trazado pasa por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) muchos se sorprendieron. Este tipo de protestas, así como la tensión que se generó entre los manifestantes y el ejército, ha supuesto enfrentamientos entre el Gobierno, algunos miembros de su mismo partido y organizaciones que en su día fueron próximas al Gobierno, como la CIDOB.

17 En Ecuador, a diferencia de Bolivia, las protestas de los movimientos indígenas contra el gobierno de Correa eran más previsibles: por un lado, la plataforma Alianza País nunca tuvo una relación tan próxima con los movimientos indígenas y, por otro, hubo una ruptura entre Correa y ciertos sectores que defendían demandas indígenas y ambientales particulares ya desde el mismo proceso constituyente. Por ello, las tensiones experimentadas hace tiempo entre las grandes organizaciones indígenas ECUARUNARI y CONAIE y el Gobierno no han sido novedad. Fue en este marco en que diversos movimientos realizaron del 8 al 22 de marzo de 2012 una gran marcha desde la región de Pangui hasta la ciudad de Quito, con la voluntad de emular las grandes movilizaciones antigubernamentales de los años noventa.

se levantaron en contra de esta situación y reclamaron más Estado y derechos para todos. Tanto el gobierno de AP como el del MAS son producto de esta última lógica.

Para Ortiz (2009), el movimiento indígena ecuatoriano de los noventa fue una alternativa respecto al neoliberalismo y reclamó mayor presencia del Estado y acceso de los indígenas a los derechos universales sociales y políticos. En la misma línea García Linera et al. (2005) señalan que los movimientos sociales bolivianos tenían una visión universalista de los derechos y reclamaban un acceso igualitario al Estado. La paradoja actual es que con la instalación de gobiernos que han dado un fuerte impulso a las políticas sociales universales, las luchas sociales se han fragmentado y expresan un claro repliegue de sus discursos y luchas colectivas hacia demandas más particulares. Para Ortiz (2009), la propuesta indígena “se debilita como alternativa al neoliberalismo” y es rebasada por el proyecto nacionalista actual de gobierno.

Este conflicto, que puede interpretarse como un choque entre demandas universalistas y particularista, se da por la necesidad de reestructurar el carácter universal y general que el Estado neoliberal destruyó en los países de América Latina¹⁸ y por la dificultad de dar respuesta a múltiples intereses organizados fruto de una sociedad que ha crecido en diversidad y complejidad. De esta forma, es necesario exponer que en la actualidad estos dos gobiernos deben elaborar su liderazgo con una doble lógica: la de la democracia representativa, que genera mayorías frente a minorías y la de la participación de los actores particulares, abriendo canales de diálogo con las minorías para poder integrar y dar respuesta a las demandas de diversidad y reconocimiento.

Parece claro entonces que, con este nuevo ciclo político (y de políticas), los gobiernos del MAS y de AP han querido dar respuesta a un tipo de demandas universalistas, mientras que se han generado nuevos conflictos de carácter más particularista cuyo reclamo ha provocado nuevas protestas impulsadas por movimientos caracterizados por defender una identidad social específica –aunque no por ello menos legítima–. Este hecho podría responder a la pregunta de por qué se han incrementado los conflictos desde 2010 y también, por qué las protestas de nuevo cuño no tienen la capacidad de convertirse en grandes olas de movilización unitaria, tal como las que se experimentaron durante los años noventa y a inicios de siglo XXI.

Así, a pesar del repunte movilizador, la dificultad de generar grandes movilizaciones retadoras puede radicar en tres elementos. Primero, la misma particularidad de los reclamos de los movimientos impide crear grandes redes y coaliciones; segundo, el cambio de la estructura de oportunidades políticas que se ha descrito en la sección anterior; y tercero, la durabilidad del éxito del modelo económico neodesarrollista, acompañada de una política social, económica y fiscal, con el que los gobiernos de

18 El estudio de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en Ecuador sobre la reforma del Estado demuestra que en el ciclo neoliberal una serie de intereses comerciales y mercantiles habían cooptado el Estado a través de la proliferación de “consejos” donde se tomaban las decisiones relativas a la política pública.

Morales y Correa pueden satisfacer reclamos universalistas y extender la presencia del Estado a lo largo del territorio nacional.

Un breve apunte final

Como se ha señalado al inicio de este texto, el objetivo del análisis ha sido definir las razones por las cuales se desactivó la protesta durante los primeros años de los gobiernos de Correa y Morales, e indagar de forma tentativa los motivos y la naturaleza del nuevo repunte de protesta popular iniciado en 2010. Para responder ambas preguntas hemos analizado el impacto de las nuevas estructuras de oportunidad política (EOP) que han supuesto las también nuevas administraciones en Bolivia y Ecuador y sus políticas públicas y, por otro lado, la tensión que ha generado desde 2010 el impulso de políticas universalistas en un entorno social complejo, fragmentado y diverso. Sin duda, desde la llegada del MAS y de AP han aparecido nuevas estructuras políticas que ha alterado la dinámica de juego y de alianzas políticas que tenían establecidas los colectivos y movimientos sociales. Esto supuso, en un inicio, una notable desmovilización y, recientemente, una reactivación de la protesta caracterizada por la emergencia de múltiples reclamos particulares.

El nuevo escenario de disputa que se presenta en un futuro inmediato va a caracterizar la formación discursiva y organizativa de los colectivos y movimientos sociales en estos dos países. Esta definición será fruto de la nueva estructura de poder del Estado y de los recursos que éste consiga obtener para dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía.

Bibliografía

- Assies, Willem (2006). “La ‘Media Luna’ sobre Bolivia: Nación, región, etnia y clase social”. *América Latina Hoy* N.º 43: 87-105.
- (2004). “Bolivia: A Gasified Democracy”. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*. N.º 76: 25-43.
- Aranzáes, Nicanor (1992). *Revoluciones en Bolivia*. La Paz: Editorial Juventud.
- Barrera, Augusto (2001). *Acción colectiva y crisis política: el movimiento indígena ecuatoriano en los 90*. Quito: Abya-Yala.
- Burbano, Felipe (2012). *Movimientos regionales y autonomías en Bolivia y Ecuador*. Tesis doctoral de Ciencia Política. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Brysk, Alison (2007). *De la tribu a la aldea global, derechos de los pueblos indígenas, redes transnacionales y relaciones internacionales en América Latina*. Barcelona: Edicions Bellaterra.

- Brysk, Alison y Gershon Shafir (eds.) (2007). *National Insecurity and Human Rights: Democracies Debate Counterterrorism*. Los Ángeles: California University of California Press.
- Degregori, Iván (1999). "Estado y etnicidad en Perú y Bolivia". En *Construcciones étnicas y dinámica sociocultural*, Kess Koonings y Patricio Silva. Quito: Abya-Yala.
- Diani, Mario e Ivano Bison (2004). "Organizations, Coalitions and Movements" *Theory and Society*. Vol. 33, 281-309.
- Do Alto, Hervé (2007). "El MAS-IPSP boliviano, entre la protesta callejera y la política institucional". En *Reinventando la Nación en Bolivia*, Karin Monasterios, Pablo Stefanoni y Hervé do Alto (eds): 71-108. La Paz: CLACSO.
- Domingo, Pilar (ed.) (2006) *Bolivia. Fin de ciclo y nuevas perspectivas políticas (1993-2003)*. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- Dunkerley, James (1984). *Rebellion in the Veins. Political Struggle in Bolivia, 1952-1982*. Londres: Verso.
- Fraser, Nancy (2006). *Social Justice in the age of Recognition*. California: Stanford University Press.
- García Linera, Álvaro, Marta Chávez León y Patricia Costas Monje (2005). *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia: Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. La Paz: Plural Editores.
- Gutiérrez, Raquel (2008). *Los ritmos del Pachakutik. Movilización y levantamiento indígena-popular en Bolivia (2000-2005)*. La Paz: Textos Rebeldes.
- Guimarães, Alice (2011). "Pluralismo, cohesión social y ciudadanía en la modernidad: una reflexión desde la modernidad". En *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina*, Fernanda Wanderley (coord.): 319-352. Bolivia: CIDES-UMSA
- Hendel, Verónica (2011). "De la respuesta a la creación. Re-creando el socialismo, la agricultura y la vida en América Latina". En *Vivir Bien ¿Paradigma no capitalista?*, Ivonne Farah y Luciano Vasapollo (coords.): 247-262. La Paz: CIDES-UMSA/ Universidad de La Sapienza/OXFAM
- Latin American Public Opinion Project (2004-2010). "The AmericasBarometer". Visita 14 de enero 2012 en <http://www.LapopSurveys.org/>.
- Martí i Puig, Salvador (2009). "Emergencia e impacto de los pueblos indígenas en las arenas políticas de América Latina". *Foro Intrernacional*, XLIX, Nº 3: 461-489.
- (2008). "Las razones de presencia y éxito de los partidos étnicos en América Latina. Los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú (1990-2008)". *Revista Mexicana de Sociología* Vol. 4: 675-724.
- McAdam, Doug y Richard Scott (2005). "Organization and Movements". En *Social Movements and Organizations*, Gerard Davos, Doug McAdam, Richard W. Scott y Mayer Zald (eds.): 4-40. Nueva York: Cambridge University Press.
- Ortiz, Santiago (2009). *¿Comuneros kichwas o ciudadanos ecuatorianos? La ciudadanía étnica y los derechos políticos de los indígenas de Otavalo y Cotacachi*. Quito: FLACSO.

- Panizza, Francisco (2009). "Nuevas izquierdas y democracia en América Latina". En revista *CIDOB d'Afers Internacionals* N° 85-86: 75-88.
- Pérez-Liñán, Aníbal (2009). *Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Rolland, Stellio (2008). *Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales*, 50 años de la FLACSO. Quito: FLACSO
- Sánchez, Francisco (2007). "Ecuador: El indio como problema". En *Pueblos indígenas y política en América Latina*, Salvador Martí i Puig (ed.). Barcelona: Ediciones Bellaterra-CIDOB.
- (2004). "No somos parte del gobierno, somos gobierno. Un análisis del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País". En *Etnicidad, autonomía y gobernabilidad en América Latina*, Salvador Martí i Puig y Josem María Sanahuja (eds.). Salamanca: Editorial Universidad de Salamanca.
- Sánchez, Omar (2008). "Transformation and Decay: the de-institutionalisation of party systems in South America". *Third World Quarterly* N° 29, Vol. 2: 315- 337.
- Tarrow, Sidney (1997). *Poder en Movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política de masas en el Estado moderno*. Madrid: Alianza.
- Van Steklenburg, Jaqueline, Bert Klandermans y Wilko Dijk (2009). "Context Matters: Explaining How and Why Mobilizing Context Influences Motivational Dynamics". *Journal of Social Issues*, 65:4: 815-838.